



LUIS FERNÁNDEZ DELGADO  
Editor  
lfernandez@codasic.com

# La Ciber Nostra

**CS** e está haciendo la ciberseguridad acreedora de la debida consideración en estos días? Con la que está cayendo cabe temer que se socave su imagen de compañera indispensable y fraternal en esta desbocada odisea protagonizada por la sociedad digital que nos ocupa.

¿Razones? Aquí va la primera. Con enorme estupor el sector español de la ciberseguridad tuvo conocimiento en marzo pasado de una noticia inquietante: Telefónica, una de las mayores empresas en España con foco intenso en ciberseguridad –448 millones de facturación en 2020 bajo la marca ElevenPaths– había despedido en febrero a su máximo responsable del área de ciberprotección, Pedro Pablo Pérez, por presunto fraude en varias operaciones corporativas. Junto a él también trascendía que otros empleados fueron

origen británico especializada en tecnología de orquestación de antifraudes.

Como es sabido, la reestructuración de Telefónica –anunciada en noviembre de 2019– propició una remodelación de su división Tech –de la que SIC ya dio cuenta en su edición anterior– por la que se agrupaban las áreas de ciberseguridad y nube, de un lado, y de IoT y Big Data, de otro, dentro del paraguas genérico de Telefonica Tech. De esta guisa, y en coincidencia con la visibilidad mediática del ‘affaire’, la matriz anunciaba el inmediato nombramiento al frente de la misma de María Jesús Almazor, anteriormente Consejera Delegada de Telefónica España.

Y ahora la segunda: el calvario **SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)**. Si no teníamos bastante ya con las oleadas de extorsiones causadas por *ransomware* cada vez más

agresivos en sus estragos e insaciables en sus pingües chantajes (la reciente a Acer andaba por los 50 millones), el golpeo con esta ‘técnica’ al SEPE y sus derivadas sociales de indefensión para con el desvalido afectado, visibiliza la acusada fragilidad y vetustez cibernética de una mayoría de entidades y organismos de carácter público cuya precariedad ciberdefensiva roza lo sonrojante, dejando en su sitio a los bocazas proclamadores de supuestos posicionamientos españoles favorables en rankings de ciberseguridad de cuestionable solvencia y/o representatividad. La verdad es que estarían

mejor calladitos (y dando más el callo con discreción para paliar las carencias). Entretanto, desde Interior se anuncia con gran boato un plan estratégico de ‘1 millón de euros’ para reforzar la lucha contra la cibercriminalidad. ¡Cielos, con semejante dotación ya podemos respirar tranquilos!

Y toca concluir con la tercera. Es bochornoso constatar cómo el triunvirato de grandes potencias mundiales –China, Rusia y EE.UU.– con sus respectivos prebostes al frente, buscan cualquier ocasión, cumbres incluidas, para arrojar los cibertrastos a la cabeza con la ciberseguridad por montera. Antes ni se la mentaba y ahora es una glamurosa arma arrojadiza. Resulta cansino oírles reprobarse mutuamente sus respectivas *razzias* digitales y, por supuesto, su bravuconería verbal nunca acompañada de pruebas fehacientes de la atribución. Eso sí, no resultaría extraño colegir que los daños derivados de su fraticida lucha en pos de la soberanía tecnológica mundial –*state-nation gangs* mediante–, sigan propiciando *vendettas* colaterales en países que como el nuestro, irremediabilmente han de alinearse con alguna de esas sensibilidades para disgusto de las restantes en este *wild west* digital global.

Proclama final: ¡Políticos planetarios, gestores y *celebrities* embelesados por la ciberprotección: no queremos que la ciberseguridad sea mentada en vano y mucho menos manoseada de modo utilitarista, no vaya a ser que la Ciber Nostra se nos venga arriba de verdad! ●

Con la que está cayendo, el zarandeo al que la ciberseguridad está siendo sometida bien pudiera socavar su imagen de compañera indispensable en esta odisea protagonizada por la sociedad digital.

igualmente desvinculados de la pujante unidad de negocio, tras un proceso investigador iniciado meses atrás y cuyas depuraciones tal vez no hayan concluido aún.

Ante las presuntas irregularidades –supuestamente cercanas al conflicto de intereses, contrataciones inapropiadas con proveedores, enriquecimiento ilícito...–, no sería extraño que la compañía presidida por Jose María Álvarez-Pallete considerara oportuno propiciar una taxativa y pronta *damnatio memoriae* y emprendiera acciones en los tribunales para esclarecer estos comportamientos reprobables, máxime con la celebración en el horizonte (23 de abril) de la Junta General de Accionistas, con el deseo a medio plazo de vender una más que suculenta unidad y con Europa muy atenta a toda señal de posible corrupción en los instantes previos al chorro de euros para la recuperación (5G incluida).

Es de público conocimiento que la multinacional española venía acometiendo en los últimos años una activa política de inversiones y adquisiciones en nuestro segmento, entre otras vías merced a Telefonica Tech Ventures –vehículo de inversión de Telefónica en *startups* en el campo de la ciberseguridad– y al *hub* de innovación abierta Wayra. Al respecto cabe recordar en los últimos tiempos las operaciones en España vinculadas con **Govertis**, **Pridetect**, **Nozomi**, **Smart Protection**, **iHacklabs**, **Alias Robotics** y hace escasas dos semanas **fcase**, *startup* de